

El gran fraude ¿Violencia antisindical en Colombia? Historia de la conspiración contra el TLC

Fundación Centro de Pensamiento Primero
Colombia, Medellín.

Autor: Libardo Botero Campuzano

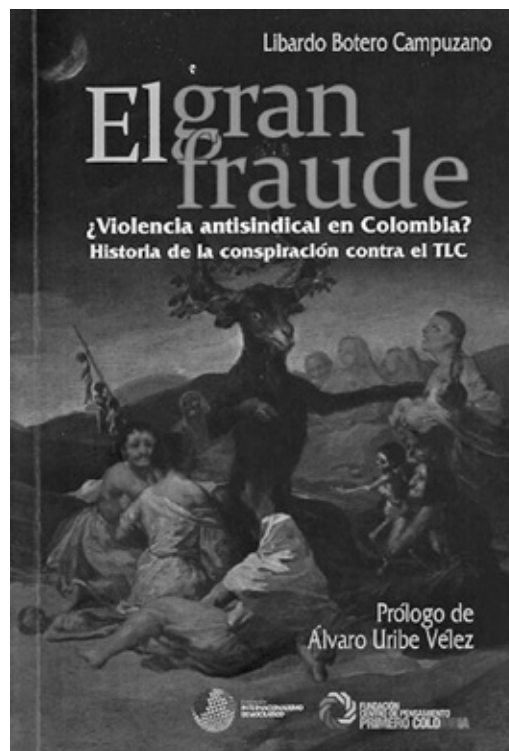
Año: 2011

Número de páginas: 449

Por: Alexander Pereira Fernández

Según el conteo que lleva la Escuela Nacional Sindical (ENS), en Colombia fueron asesinados 2.909 trabajadores sindicalizados entre enero de 1986 y diciembre de 2011. Es preciso indicar que la ENS es una institución que, entre otras funciones, registra las violaciones que atentan contra la vida, la libertad y la integridad de trabajadores sindicalizados. Los criterios de delimitación de los registros se definen con base en pruebas que permitan establecer si se trata de un crimen relacionado con la actividad sindical; de otra manera, el caso se excluye de la base de datos.

La base de datos empezó a construirse con el registro de crímenes cometidos desde 1991; pero, más tarde se incluyeron registros desde 1986 y, luego, desde 1977. La cifra total estimada de sindicalistas asesinados es de 2.955. Como cualquier registro de este tipo, la base de datos de la ENS está en permanente transformación, no sólo porque crece en la medida en que pasa el tiempo, sino también porque muchas veces aparece nueva información sobre violencia antisindical; información sobre la cual no se había logrado acceder (por ejemplo: la proveniente de zonas controladas por paramilitares donde la denuncia pública se castiga con la muerte).



Fue debido a la creciente preocupación que generó el incremento de trabajadores asesinados que empezó a construirse esta base de datos. Se intuye así que la cifra de homicidios irá creciendo a medida que se profundicen las indagaciones sobre crímenes cometidos antes de 1986; por ejemplo, muchos sindicalistas aún recuerdan la dura violencia que enfrentaron durante la primera mitad de los años ochenta. Pese a que se trata de una base de datos que surgió relativamente tarde y con las limitaciones técnicas de una entidad que no estaba diseñada para asumir semejante tarea, es claro que hoy es el mejor instrumento con el que se cuenta para medir los alcances de la violencia antisindical en el país. Por su parte, la base de datos del Estado, producto de las presiones sobre algunos gobiernos antes que de una auténtica preocupación por la violencia antisindical, sólo ha registrado crímenes cometidos desde 1999. Aunque es posible encontrar fallas en los registros de la ENS, como puede suceder en cualquier otra base de datos, incluyendo la oficial, no es menos cierto que gracias a la experiencia se han logrado

ALEXANDER PEREIRA FERNÁNDEZ, Historiador de la Universidad Nacional de Colombia. Maestría en historia de América Latina de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México. Correo electrónico: elloropereira@yahoo.com.

refinar las técnicas, métodos y formas de control de la información. De tal manera, cuando se detecta un error, el paso siguiente es corregirlo; así, no es extraño que un caso registrado pueda ser luego eliminado del sistema de información. Desafortunadamente, esto no es muy frecuente, lo que tiende a suceder es que aumente la documentación sobre casos registrados o aparezcan casos nuevos.

Que en Colombia se cuente con un registro que habla de cerca de tres mil trabajadores asesinados por motivos relacionados con su actividad sindical, es algo que debiera poner a pensar seriamente en el carácter de la democracia que se ha venido construyendo. Algunos sectores académicos, centros de investigación y algunos políticos apuntan hacia análisis de este tipo. En menor medida, pero con mayores posibilidades de difusión, también se han pronunciado voces que niegan el fenómeno de la violencia antisindical. Es dentro de esta segunda corriente que se ubica el libro que reseñamos; su autor, el economista Libardo Botero Campuzano (1948), es egresado de la Universidad de Antioquia donde, además de haber ejercido como profesor, inició una larga militancia política en las filas del Movimiento Obrero Independiente (MOIR). Luego de tres décadas de militancia en la izquierda, Botero abrazó el proyecto político de Álvaro Uribe Vélez, sobre quien publicó una voluminosa zaga de tres tomos donde compila textos y discursos del ex presidente (2007-2008). También publicó el libro *Parapolítica - Verdades y mentiras* (2008), cuyo objetivo es replicar la investigación sobre el fenómeno de las alianzas ilegales entre paramilitares, narcotraficantes y políticos que elaboró la Corporación Nuevo Arco Iris en el segundo semestre de 2007. Estas son tareas que Botero ha realizado como miembro del Centro de Pensamiento Primero Colombia, dirigido por José Obdulio Gaviria, asesor del ex presidente Álvaro Uribe Vélez.

El objetivo de Libardo Botero es demostrar que son falsas las bases de datos construidas por entidades fuera del control oficial. Para comprobarlo, él mismo se convierte en una especie de gran depurador, aplicando filtros cuyo fin es disminuir en el papel la cifra de sindicalistas asesinados: “de miles a solo unas decenas en dos décadas” (p. 78). En términos estrictos se trata de un arreglo de cuentas con la ENS, pese a que también se mencionan las bases de datos de la Central Unitaria de Trabaja-

dores (CUT) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), usadas, más bien, para reforzar el ataque a la ENS. A medida que se avanza en la lectura de las cuatrocientas cincuenta páginas del libro el lector descubre que la ENS es el gran dolor de cabeza del autor, su “enemigo malo”. Pronto, los comentarios imparciales de Botero se tornan en críticas cargadas de epítetos agresivos e histéricos; en un lenguaje aparentemente erudito, abundan las expresiones del siguiente talante: “La magnitud de los errores, deformaciones, omisiones, excesos, ambigüedades y desgüeño de todo orden [...]”; “serie infinita de arbitrariedades, inexactitudes, descuidos, alteraciones y torpezas [...]” (p. 130). Con ese estilo, incluso llega a hablar de “orgías” y “aquejarres”.

Con ese tono altisonante, el autor no sólo busca deslegitimar la base de datos de la ENS, sino también las conclusiones a las que llega a partir de sus resultados; entre otras, que un altísimo porcentaje de la violencia contra los sindicatos se comete para contrarrestar sus acciones colectivas de carácter reivindicativo, político, y que la guerra interna que vive el país ha favorecido el ejercicio de esa violencia, particularmente por medio de la regulación de los conflictos laborales a través de acciones antisindicales llevadas a cabo por combatientes del conflicto armado interno. En contra de estas conclusiones, el autor asevera que la violencia contra los sindicalistas no se distingue en nada de la que han experimentado otros sectores de la población en Colombia, expuestos todos a la delincuencia, al narcotráfico y a la guerra entre paramilitares y guerrilleros: “No hay una ‘violencia antisindical’ arraigada en el país, sino que los sindicalistas son víctimas de la misma violencia que afecta al conjunto de los colombianos, sin que su intensidad sea mayor (de hecho es menor), ni sistemática, ni dirigida, ni creciente” (p. 261).

De ese modo, plantea que, teniendo en cuenta el nivel del conflicto armado que vive Colombia, los asesinatos de sindicalistas son bajos en comparación con los de otros grupos sociales; además, están condicionados por los efectos colaterales de esa violencia o por asuntos personales en los que se ven involucrados los sindicalistas. También arguye que muchos de quienes son incluidos en la lista de sindicalistas asesinados no estaban afiliados realmente a ningún sindicato y otros tantos pertenecían a organizaciones que no deberían llamarse

“sindicatos”. En síntesis, el autor defiende que las listas de sindicalistas asesinados están infladas y que la gran mayoría de homicidios fueron por causas ajenas a su oficio sindical.

Se trata de un libro escrito con un fuerte tono de revancha, ya lo hemos visto; se apela a una crítica seudocientífica para deslegitimar las bases de datos y las interpretaciones que al margen del Estado surgen de ellas. El texto carece de rigor, aunque enarbole las banderas de la exigencia científica como una proclama que descalifica cualquier interpretación que hable de violencia antisindical en Colombia. La falta de rigor científico se hace evidente porque Botero ni siquiera parte de la construcción de una base empírica propia que le permita rebatir aquellas en las que, pese a sus posibles imperfecciones, se apoyan la ENS y la CUT. Lo más contradictorio de todo es que el autor toma como fuentes principales esas mismas bases de datos que tanto intenta invalidar; todo, claro está, a través de una serie de juegos retóricos y especulativos que buscan deslegitimarlas. El texto tampoco cuenta con referentes teóricos o conceptuales, ni mucho menos con una metodología coherente que guíe y articule sus páginas. Por el contrario, está sobrecargado de rabiosos adjetivos, sonoros improperios y giros lingüísticos; todo ello constituye un estilo retórico que, más que aclarar, confunde al lector.

Los supuestos imperfectos que Botero dice encontrar en las bases de datos de la ENS, la CUT y de la OIT le sirven no sólo para reinterpretar a su acomodo el fenómeno de la violencia antisindical, sino también para defender la idea según la cual cerca de la mitad de los registros sobre sindicalistas asesinados son falsos, que todo no es más que un vulgar fraude orquestado por quienes han ido realizando el conteo de la violencia antisindical. Por lo demás, es evidente que la gran debilidad del libro está en que, aparte de no aportar nuevas fuentes empíricas, tampoco se vale de una reconstrucción del proceso histórico ni muchos menos de un análisis del proceso social que le permita al lector superar las cifras y estadísticas con que hasta ahora se cuenta. Es un texto que no aporta en la comprensión del fenómeno de la violencia antisindical; por el contrario, parece encaminarse a demostrar que no ha existido nunca en Colombia. Recurre, para ello, al encubrimiento de distintas realidades; a resaltar otras según la conveniencia de

interpretaciones favorables a ideas preconcebidas por el autor; a eliminar acontecimientos históricos cruciales, y, finalmente, a omitir contextos sociales imprescindibles para el análisis.

Por eso el libro termina siendo una burla contra la memoria de los trabajadores asesinados, quienes aquí son sólo cifras útiles para artificios retóricos que ignoran la tragedia personal de sus vidas, las de sus familiares y la de los sindicatos a los que pertenecían, debilitados por la ausencia de líderes carismáticos asesinados. Asimismo, el autor se preocupa más por los aspectos formales de las bases de datos que por la violencia que se ejerce contra cientos de trabajadores sindicalizados. La crueldad del enfoque del libro conduce a pensar que, no conforme con haberse segado la vida de estos trabajadores, ahora también se pretende eliminarlos en el olvido, ocultando su existencia y su carácter de víctimas. Queda en la mente del lector que los sindicalistas victimizados son sólo cifras con las que se puede negociar en un mercado que vende productos como, por ejemplo, la buena cara de los dos gobiernos de Uribe Vélez o la legitimidad del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos. Sobre estos dos puntos el autor hace especial énfasis. Asevera, sin soslayar el anacronismo, que la divulgación de las cifras de violencia antisindical obedece a la “historia de la conspiración contra el TLC”, como si fuera posible conspirar contra convenios de libre comercio que ni siquiera se habían discutido aún: “En cuanta declaración aparece sobre el tema, suscrita por la lista interminable de aparatos que intenta bloquear estos convenios, aparece el nombre de la ENS” (p. 115).

El autor despliega una serie de anécdotas, producto de su larga trayectoria en el MOIR, para demostrar la participación del sindicalismo en la “combinación de todas las formas de lucha”. Según él, esta estrategia política, consigna de la izquierda comunista, es la verdadera responsable del homicidio de sindicalistas. Afirma haber sido testigo de que miembros de sindicatos mantenían relaciones cercanas con partidos políticos vinculados a las guerrillas o directamente con ellas, en clara expresión de la práctica de “la combinación de todas las formas de lucha”. Así, la práctica de combinar medios legales e ilegales de lucha en Colombia se originó en las guerrillas, las que condujeron a la descomposición del sistema democrático del país.

Es decir, no se trató de un fenómeno que llegó a arraigarse en la cultura política colombiana como parte del carácter restringido de su sistema democrático, del carácter híbrido del Estado –siempre en la cuerda floja entre las vías de facto y la constitucionalidad–, tal como lo podría constatar un análisis histórico, sino a la alianza entre sectores de izquierda y las guerrillas: “En el caso de las FARC¹ existía la vía directa de la conexión de vieja data del Partido Comunista –su fundador y mentor– con buen número de sindicatos, agrupados entonces en la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC), que años después entraría a formar parte de la CUT. El ELN² sentó sus propios reales sobre todo en el Magdalena Medio y consiguió penetrar y tener influencia clara en sindicatos tan conocidos como la USO³” (p. 303). En el mismo tono, el autor hace el siguiente señalamiento: “Docentes asesinados que muy probablemente estaban comprometidos con organizaciones al margen de la ley” (p. 346), escribe sin sonrojarse. Es una gran contribución a la consolidación del estigma que padecen los sindicalistas y que sirve para que algunos sectores de la sociedad colombiana justifiquen la violencia antisindical.

La llamada “combinación de todas las formas de lucha” resulta ser la clave que descubrió Botero para explicarlo todo, es el axioma que había producido el círculo vicioso que condujo a la violencia antisindical; así se evita incluir en esta cadena causal al histórico autoritarismo de Estado, la tradicional exclusión política y las nuevas alianzas antidemocráticas entre funcionarios públicos, paramilitares, algunos empresarios y mafias del narcotráfico. La práctica de combinar medios legales e ilegales en el ejercicio político, según esa tesis, sólo era monopolio de una izquierda que había optado por la vía de las armas. Con esta idea el autor desacredita a sectores relacionados con la izquierda y, a través de ella, a organizaciones que le eran afines políticamente, tales como los sindicatos. La idea se repite interminablemente para establecer la culpabilidad del sindicalismo de su propia victimización. La “combinación de todas las formas de lucha” le sirve incluso para explicar la lógica con la que se habrían construido las bases de datos que, desde fuera del Gobierno,

tratan sobre violencia antisindical. Según Botero, lo que ha sucedido es “algo así como el traslado de la tesis de «la combinación de todas las formas de lucha» a este terreno de la información y el análisis estadístico” (p. 202).

Es imposible contestar en una reseña a tantas inexactitudes como las que contiene este libro; para rebatir cada una de ellas habría que escribir otro texto tan extenso como este gordo de Botero. Sencillamente, resaltamos que está compuesto por cientos de citas de informes del Gobierno, en las que se descontextualizan informes no oficiales y se juega irresponsablemente con las bases de datos elaboradas por entes distintos al Estado colombiano. Además, en sus inferencias no se toman en cuenta las implicaciones que tiene la baja afiliación de trabajadores a sindicatos en Colombia ni, mucho menos, las razones de este fenómeno; si acaso, se relaciona con la violencia antisindical y qué tanto condiciona el registro de trabajadores victimizados. En cambio se dedica a sugerir, sin pruebas, que muchos trabajadores registrados en las bases de datos no se hallaban sindicalizados en el momento de sus homicidios y que, por lo tanto, no deberían incluirse en los registros. Al respecto, llama la atención que el autor no se inquiete por la forma como el Gobierno sistematiza los datos sobre la violencia contra trabajadores sindicalizados. Simplemente, dice encontrarse sorprendido ante la coincidencia que presentan las cuentas de su libro con las del sistema judicial colombiano: “para nuestro asombro, se parecen bastante a las que registra el sistema judicial” (p. 255). No percibe Botero que es posible observar cierto patrón en la base de datos del Gobierno: es coherente porque excluye casos de violencia antisindical en los que se vinculan miembros de organismos del Estado. Tampoco percibe que tal patrón logró afianzarse a partir del año 2002 cuando se hacen más rígidos los criterios para el registro de estos casos por parte del Gobierno.

Por otra parte, es preciso indicar que el autor tomó como fuente el libro *2515 o esa siniestra facilidad para olvidar*, producido por la ENS en el año 2007; a partir de ahí sumó los registros que la ENS reportó año tras año,

1. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
2. Ejército de Liberación Nacional.
3. Unión Sindical Obrera.

hasta el presente, en sus *Cuadernos de derechos humanos*; pero, nunca hizo el ejercicio de corroborar que la base de datos que aparece en el libro de 2007 fue corregida y transformada en la medida en que aparecía nueva información, simplemente sumó a ella los datos que aparecían en los reportes anuales de los *Cuadernos*, con lo que observa inconsistencias por todas partes. Lo que no parece querer ver es que las bases de datos son como un organismo vivo, siempre en movimiento, nunca consolidadas, que pueden ir transformándose debido a la aparición de nueva información. Son muchas las trampas de ese tipo que hace Botero; en otro momento toma algunos vacíos de información por errores o como argumento para invalidar la existencia de un caso de victimización. El autor llega a extremos cómicos, como cuando intenta invalidar casos de homicidio que no poseen la referencia del sitio donde se cometieron, o cuando falta algún otro dato: ignora que la ENS no publica toda la información en sus *Cuadernos* por la simple razón de que debe sintetizar los cuadros y gráficas que publica en papel. Además, no se entiende la sorpresa del autor ante las faltas de información si ni siquiera el propio Estado, principal responsable de estas tareas, ha logrado consolidar los datos.

Lo único que pareciera darle coherencia al libro es la insistente manera en que se enuncian fragmentos de *Las almas muertas*, novela de Nicolás Gogol. El abuso de citas, como un martilleo constante, logra exasperar al lector. Algunas, sin embargo, quedan dando vueltas en la cabeza, tal vez porque se encuentran allí rastros de la intención más indecible del libro de Botero: demostrar, en contra de evidencias irrefutables, que en Colombia no se asesinan trabajadores por su actividad sindical y que las cifras de muertos sobre ese fenómeno son irreales: “no llamó a dichos siervos almas muertas, sino simplemente inexistentes” (p.75). Fragmento que nos recuerda que muchas veces la literatura puede contar la historia mejor que la propia Historia. Así como en *Cien años de soledad*, cuando José Arcadio Buendía, luego de presenciar la masacre de los trabajadores bananeros, murmura: “Debían ser como tres mil. Los muertos”. La mujer que le servía el tinto, viéndolo con mirada de compasión, le dijo: “Aquí no ha habido muertos [...], no ha pasado nada”. Luego, donde quiera que el joven se detenía a preguntar, todos le decían lo mismo: “no hubo muertos”. Pero él repetía que debían ser como tres mil, cifra que nos recuerda los 2909 nombres que ha registrado la ENS y hoy muchos insisten en olvidar.